

dar ligada con tal resolucion sin poder mudar de parecer cuando llegase el caso de discutir el proyecto. Pero el H. Várquez contestó que el único objeto que la comisión se había propuesto era el descubrir en general la opinion de los H. H. diputados sobre el asunto que se trataba, para no trabajar inútilmente en sentido contrario al parecer de la mayoría; y que en ninguna manera perdería la R. Cámara su libertad para resolver lo que juzgase conveniente en la discusion del proyecto. En este concepto se votó el informe de la comision, y fué aprobado. — Con lo cual se cerro la sesion por ser mas de las tres de la tarde.

El Presidente.

José A. Gálvez

El Secretario.

P. Mazzarosa

Sesión del 29 de setiembre.

Concurrieron los H. H. Presidente, Vicepresidente, Aguirre, Aguilera, Batallas, Cepeda, Dávila, Echeverría, Espinosa, Freire, González Calisto, González Ricarte, Huerta, Jaramillo, Maldonado, Molineros, Piedra, Salazar, Salvador, Sucre, Alquillas, Várquez, Viteri, Chambrano M. y Chambrano N. — Aprobada el acta de la sesión precedente, los H. H. Dávila y Chambrano M. dieron cuenta de que habían presentado al Poder Ejecutivo los cinco proyectos de que la víspera fueron encargados; y antes de proceder al despacho, el H. Presidente dejó su puesto al H. Vicepresidente, y con apoyo de los H. H. Echeverría y Dávila, pidió la recautoria y consiguiente reconsideración del art. 22 del proyecto de Ley orgánica militar. Despues de un breve debate la proposicion fué aprobada, y sometido a discusion el mencionado articulo, el H. Presidente sostuvo la incon-

venencia de que pudiesen ser nombrados para secretarios de las comandancias generales los oficiales que no tuviesen por lo menos el grado de sargento mayor, contra la disposición del código militar vigente; y después que se discutió brevemente este punto, fue negado el artículo. Entonces observó el Hr. Várquez, que con la negativa del artículo podía resultar el inconveniente de que el Comandante general y el secretario tuviesen la misma graduación; y para obviarlo, el Hr. Presidente, con apoyo del Hr. Alquillas, propuso la revocatoria y reconsideración del art. 21: la cual proposición fué también aprobada. Despues nego' la Hr. Cámara ^{de la Función Pública} dicho artículo según el cual podía recaer el nombramiento para Comandante general en los Tercios Coronelos. — Terminado este asunto, fué discutido y aprobado el informe de la comisión de guerra, relativo a la solicitud del sargento mayor Juan José Serrano, y reducido a decir que se remitiese al Tribunal de cuentas la documentación del peticionario, a fin de que hiciese uso de su facultad tocante a las calificaciones militares.

Luego se puso a la primera comisión de peticiones una solicitud del capitán Mariano Parre reducida a pedir una orden de pago contra el Tesoro por sueldos abusados; y a la segunda del mismo ramo otra solicitud en la cual José María Alresta pedía una resolución legislativa, asegurando haber sido despojado de un terreno de su propiedad por el cura y el síndico de la parroquia de Fulcas. — Terminado el despacho la Hr. Cámara se ocupó en discutir por tenerse ver el proyecto reformatorio de la ley de Hacienda; y las medidas a debate sucesivamente, fueron aprobadas sin que se ofreciese mayor dificultad las catorce primeras modificaciones de la ley citada. Puesta en consideración de la Hr. Cámara la 15^a según la cual el Tribunal de cuentas debía comprenderse de cinco ministros que, el Hr. Várquez observó que componiéndose de cuatro en la actualidad y estando bien servido por ellos el despacho, según el informe del Ministerio de Hacienda, era innecesaria la creación de otra plaza de quer en aquél Tribunal; y con apoyo de los Hrs. Maldonado y González Ríos, propuso que en el artículo que se discutía se

dijese "cuatro" en vez de "cinco" ministros jueces. Esta proposicion fue combatida por el Hr. Echeverri que sostuvo la necesidad de crear una plata en el Tribunal para la segunda revision de las cuentas; pero los Hrs. Vazquez y Maldonado la sostuvieron observando que con el aumento de un ministro no se allanaban las dificultades que se ofrecian a dicha revision, y que era menester escoger otro medio para evitarlas. cerrado el debate fue aprobada la proposicion, y modificada por ella, fue tambien aprobado el articulo del proyecto. La reforma 16^a, relativa al articulo 72 de la ley fue aprobada con la indicacion hecha en el segundo debate, para que se prescribiera que los ministros del Tribunal de cuentas permaneciesen en sus destinos hasta la terminacion del periodo constitucional. Las modificaciones 17^a y 18^a se aprobaron en los terminos propuestos por la comision de Hacienda; y la 19^a con supresion de la parte negada en el segundo debate, en virtud de la cual las municipalidades debian contribuir para el sostenimiento del Tribunal con la suma de cinco mil cuatrocientos pesos anuales. Las dos reformas siguientes se aprobaron sin contradiccion; pero puesta en consideracion de la Hr. Cámara la relativa al art. 85 de la ley, el Hr. Sucre observo que la Comision habia propuesto únicamente la supresion del parrafo de dicho articulo; pero que el Hr. Diputado, con ser miembro de la comision no habia tenido conocimiento de la reforma del art. principal acordada por los otros Hr. H. miembros de ella; y respecto de esta reforma discurrio oponiéndose a que se aceptase, por cuanto atribuia al Congreso facultades judiciales; y sostuvo la supresion del parrafo, como la unica reforma conveniente. El Hr. Echeverri fué del mismo sentir, y el Hr. Salazar contesto que hacia muchos dias habia estado la nueva modificacion a la vista de todos los Hr. Diputados, especialmente de los miembros de la comision; que ella hacia desaparecer las dificultades que la Hr. Cámara habia encontrado en el examen de las cuentas del ministerio de Hacienda; y que no atribuya al Congreso ninguna facultad contraria a la libertad que debian tener los jueces del Tribunal de cuentas, por quanto se limitaba a disponer

que el Tribunal pasase en todo caso a la Legislatura las cuentas del Ministerio de Hacienda con un informe motivado, a fin de que si la Cámara de diputados hallaba fundamento para eximir al Ministro la responsabilidad pecuniaria, las declarase; y si veía que había infringido las leyes, hiciese uso de su atribución acusándolo ante el Senado. El H. Vizcaíno observó, por una parte, que no era posible suprimir el parágrafo del art. 85, porque se presumiría que el Congreso había querido dejar encubierta la conducta del Ministerio, derogando la disposición en cuya virtud debía el Presidente del Tribunal remitir a la Legislatura las cuentas del Ministro, ora fuese condenario o absolutorio el fallo que sobre ellas hubiese recaído; y por otra parte, que no pudiendo el Congreso invalidar las sentencias del Tribunal, aunque fueran indebidamente absolutorias, por vedarlo la Constitución de la República, era menester precentiar el interés nacional, disponiendo que los jueces fueran acusados cuando hubiesen absuelto al Ministro de Hacienda, habiendo motivos para declararlo responsable. Por esta razón, y con apoyo del H. Gobernador Calisto, hizo la proposición siguiente: "Que, conservándose el art. 85 de la ley vigente, el parágrafo diga: 'El Presidente del Tribunal de Cuentas presentará a la Cámara de diputados, dentro de los seis primeros días de sus sesiones, la cuenta del Ministerio de Hacienda con el fallo pronunciado, sea cual fuere el que hubiese recaído, para que, si los jueces del Tribunal no han declarado la responsabilidad legal o pecuniaria, a pesar del mérito de la cuenta, los mande poner en causa ante la Corte Suprema; y si el Presidente faltare a este deber, será depuesto de su destino.'". Sometida a debate esta proposición, la combatió el H. Guerrero encontrando en ella una facultad judicial atribuida a la Cámara de diputados, que era lo que desde un principio se había desechado, y además el ejercicio de una atribución con respecto a los jueces del Tribunal de Cuentas, que no se hallaba entre las atribuciones constitucionales de la Cámara. Observó que no había razón para temer que se atribuyese a cominvenencia la supresión del parágrafo único del artículo 85, tanto porque el parágrafo en sí carecía de objeto, cuanto por el carácter de los H. H.

diputados, no menos que por la integridad de los señores ministros del Tribunal de cuentas; y concluyó diciendo q. lo mas legal y conveniente que podía haberse era insistir en la supresión del mencionado parágrafo que justamente había sido censurado como exótico en las discusiones relativas al examen de las cuentas del Ministerio. El Hr. Maldonado, así como el Hr. Dávila se opuso también a la proposición, observando que en ella se daba a la Cámara lo mismo que se la quería negar; esto es una atribución judicial, pues que no sería posible descubrir la responsabilidad de los jueces sin examinar las cuentas, y sin que el fallo respecto de aquellos comprendiese aprobación o reprobación de la sentencia. El Hr. Dávila sostuvo, además, que la proposición era ilógica, por cuanto en un artículo destinado a hacer efectiva la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, incluía una disposición diversa,ual era la de que se pusiese en causa a los jueces del tribunal. El Hr. Lalaran defendió el artículo propuesto por la comisión y combatió la proposición del Hr. Vargas, observando que, según el primero, la Cámara de diputados no sojuzgaría los actos del Tribunal de cuentas, una vez que los del Ministerio deberían pasar a la Legislatura solo con un informe motivado, no con sentencia judicial; y que, en virtud de la segunda, la Hr. Cámara de diputados se despojaría de una de sus mas preciosas e importantes atribuciones constitucionales, sancionando su incompetencia para hacer efectiva la responsabilidad del Ministerio, cuando los fallos del Tribunal fuesen indebidamente absolvatorios. El Hr. Chiriboga discurrió en el mismo sentido de esta última observación. El Hr. Vargas, por el contrario, sostuvo el debate haciendo presente que la proposición no era ilógica, puesto que contenía una disposición estrechamente ligada con el objeto del art. 85: que no daba a la Cámara ninguna atribución judicial, porque limitaba su competencia a un mero examen de la conducta de los jueces, para recibir que, en caso de culpabilidad, fuesen juzgados por la Corte Suprema; de manera que la facultad judicial quedaba atendida a dicha Corte, no a la Cámara, que era menester pre-

venir el abuso que alguna vez podía cometer el Tribunal al solviendo a los ministros de Hacienda, y que esa necesidad se llenaba con las proposiciones. Respecto de la reforma propuesta por la comisión, observó: que si el Presidente del Tribunal remitiese las cuentas del Ministerio sin fallo judicial, y con solo un informe motivado, las cuentas no serían juzgadas por él, a pesar de ser el único que es competente; y que no pudiendo ser juzgadas tan poco por la H. Cámara, por impedirlo la Constitución del Estado, resultaría que los Ministros de Hacienda no tendrían que de su conducta administrativa, y que las cuentas quedarían sin sancionarse. — En este sentido se discutió el punto largo y acaloradamente, pues los Hs. Ceballos, Sucre, Dávila Vicepresidente, Salazar y Várquez sostuvieron cada uno su parecer, hasta que, cerrada el debate, y consultado el voto de la H. Cámara, la proposición fue segada. — Entonces el H. Salazar pidió que, para proceder con mejor acuerdo en asunto de tanta importancia, se dejase la resolución hasta el día siguiente, y suspendido el debate relativo a la reforma propuesta por la comisión de Hacienda, se cerró la sesión, por ser mas de las tres de la tarde.

El Presidente.
Juan F. Salabedra

El Secretario.
M. Aguirre

ARCHIVO

Sesión del 30 de setiembre.

Asistieron los Hs. Hs. Presidente, Vicepresidente, Aguirre, Aguilar, Bratallas, Cepeda, Dávila, Ceballos, Chaverri, Espinosa, Freire, González Calisto, González Vicente, Huerta, Jaravilla, Maldonado, Molineros, Pedra, Salazar, Salvador, Sucre, Agustín, Várquez, Viteri, Zambrano Mo. y Zambrano V. — Aprobada el acta de la sesión anterior, se recibieron, con la sanción constitucional, el decreto relativo a la exportación del curvaduro, y el que autorizaba al Poder Ejecutivo para que contratase pro-